

A Allende, su programa de desarrollo profundo del capitalismo de Estado, lesionando intereses de sectores empresariales norteamericanos y de una buena parte de la oligarquía chilena, no le abrió el «camino pacífico» hacia ninguna parte. Por el contrario, fue el detonante para que centenares de miles de obreros, campesinos, empleados y estudiantes se organizaran por su cuenta, al margen de Allende y su combinación política, para «seguir adelante» en la lucha por destruir el poder económico, político y social del imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena. En 1973, el «dique de contención» empezaba a saltar hecho trizas por la fuerza de las masas. Entonces, sus enemigos se pusieron de acuerdo: no bastaba reemplazar a Allende; había que reemplazar el sistema de sujeción de todo el pueblo chileno al carro de quienes han vivido de su sudor y de su trabajo por siglos. Enterraron la democracia y la reemplazaron con el desempolvado cadáver del fascismo. Y en el derrumbe de la democracia chilena, fue aplastado no solamente Salvador Allende, sino también decenas de miles de chilenos.

Para hacer este trabajo, el imperialismo norteamericano y la oligarquía chilena pusieron en marcha al pilar fundamental del Estado que habían creado en Chile las Fuerzas Armadas. De esa «puesta en marcha», habla la historia de estos siete intentos de insurrección militar. Su orden temporal es éste: 1) Septiembre-octubre de 1970; 2) marzo de 1972; 3) septiembre de 1972; 4) junio de 1973; 5) agosto de 1973; 6) siete de septiembre de 1973; y 7) el 11 de septiembre de 1973. Vamos a examinarlos en detalle.<sup>1</sup>

### *El caso Schneider*

Era el jueves 22 de octubre de 1970. Desde la noche del 4 de septiembre del mismo año, cuando el recuento de los votos en las elecciones presidenciales señalaron el triunfo, por un escaso margen de 30.000 electores en tres millones de votos emitidos entre tres candidatos, para Salvador Allende, candidato de una agrupación de partidos de izquierda, el país se había estremecido con los efectos de diversos intentos por impedir que Allende se hiciera cargo de la presidencia de la República.

Ese jueves 22 de octubre ocurrió un hecho que, trágicamente para los partidos políticos de la Unidad Popular, fue calificado por sus dirigentes como «la señal» de que las Fuerzas Armadas

chilenas eran «una institución única en América Latina» que no tenían influencia «del imperialismo norteamericano ni de la oligarquía chilena» y que por eso mismo, «no constituían un factor de peligro» para el proceso de transformaciones socioeconómicas que suponía el programa de la Unidad Popular. Este error de información de lo que realmente ocurrió en el seno de las Fuerzas Armadas chilenas entre el 4 de septiembre y 22 de octubre de 1970, fue el punto de partida desde el cual Salvador Allende fue acumulando equivocación tras equivocación en su política respecto a las Fuerzas Armadas, concediéndoles, de hecho, todas las facilidades para que concretaran su sangriento asalto a la Administración civil el 11 de septiembre de 1973.

Volvamos al jueves 22 de octubre de 1970. Y hagámoslo en el lenguaje del parte policial del mayor Carlos Donoso Pérez, a cargo de la Vigésimo cuarta Comisaría de Carabineros de Las Condes (barrio orjente de Santiago).

«A las 8.20 horas, más o menos, en circunstancias que el señor comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, se dirigía a su despacho en el automóvil fiscal conducido por el cabo-chófer Leopoldo Mauna Morales, por la calle Martín de Zamora en dirección al poniente, fue interceptado por un vehículo que chocó con el que viajaba el señor General; vehículo éste que fue rodeado por cinco individuos, uno de los cuales haciendo uso de un elemento contundente similar a un combo, rompió el vidrio posterior izquierdo y luego disparó contra el general Schneider, impactándolo en la región del brazo, en el hombro izquierdo y la muñeca izquierda, ocasionándole lesiones de carácter reservado, según pronóstico del Hospital Militar, donde fue llevado para su inmediata atención.»

El domingo 25 de octubre, el general Schneider falleció.

El suceso se interpretó oficialmente así:

a) El general Schneider fue asesinado por un banda de conspiradores «pagando con su vida su apego a la Constitución chilena».

b) El asesinato buscaba un pretexto «para una insurrección militar» que «impidiera el ascenso a la presidencia de Salvador Allende», pero «en una excepcional muestra de disciplina, el Ejército, herido tan profundamente por el atentado, reaccionó precisamente de la manera opuesta a la que buscaban los conspiradores, reiterando su adhesión a las reglas del juego constitucional».

c) El complot fracasó, a pesar de la brutalidad del «recurso

extremo del asesinato político» utilizado por los complotadores para desencadenar la insurrección militar.

Sin embargo, la realidad era muy distinta.

El Ejército «en una excepcional muestra de disciplina», ¡pero con respecto al Pentágono!, no reaccionó como buscaba la fracción de los conspiradores que siguió adelante con el plan cancelado, porque una semana antes, Schneider había explicado cómo el Pentágono pensaba que «era mejor» permitir que Allende asumiera la presidencia de la República, seguir la táctica de «esperar y ver» y trabajar sobre condiciones «objetivas y de largo plazo para actuar sobre seguro, en caso de necesidad».

Incluso más todavía. Para impedir que la opinión pública chilena se enterara de la sucia trama que se escondía tras el asesinato del general René Schneider, los altos mandos militares de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros, se pusieron de acuerdo para revelar parte de la trama, sacrificar con el retiro de las filas a una media docena de generales implicados, y permitir un «juicio suave» al ex general Roberto Viaux Marambio, jefe de la pandilla encargada de ejecutar a René Schneider y que estaba en contacto directo con los hombres de la ITT y de la CIA.

En suma, al revés de lo que dijeron los políticos de izquierda en los tres años que siguieron a este asesinato, la muerte del comandante en jefe del Ejército chileno en octubre de 1970 señalaba el enorme grado de influencia que en él tenía el Pentágono norteamericano para cualquier política de liberación por parte del Gobierno de la Unidad Popular.

(En febrero de 1971, el autor de este reportaje conversó con uno de los encargados de la UP sobre las relaciones con las Fuerzas Armadas, explicándole, todo lo que sabía sobre el asesinato de Schneider y lo que eso significaba. Éste le respondió: «Si tú publicas eso, te van a dar cadena perpetua, o fusilamiento, por traidor a la Patria al acusar de algo tan repugnante a nuestros gloriosos institutos armados.» En todo caso, se comprometió a comunicar a Salvador Allende la historia, llevándose una copia de un informe preparado por el autor de este reportaje. La respuesta vino en el Mensaje Persidencial ante el Congreso, del 21 de mayo de 1971, cuando, al referirse al papel de las Fuerzas Armadas «en el proceso de cambios de la vía chilena hacia el socialismo», Allende dijo que «a pesar de algunos agoreros y catastrofistas que dudan del patriotismo de nuestras fuerzas armadas... éstas, por su profesionalismo y respeto a la

Constitución, son LA GARANTÍA del actual proceso de cambios».)

Desde ese momento, para los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular pasó a ser un axioma que el general René Schneider era «símbolo del soldado con conciencia cívica y del hombre que sirve a la Patria en la paz obedeciendo a las leyes» (Salvador Allende, en su discurso de Santiago el 21 de diciembre de 1970).

Y, en un paso más adelante en la audacia política, Allende llegó a construir la tesis siguiente:

«Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organizado y disciplinado, de partidos políticos que entienden lealmente la unidad, de trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus federaciones y en la Central Única, son la base granítica del proceso revolucionario. LO SON TAMBIEN, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces legales; lo son, lo repito y lo subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las que rindo un homenaje, AL PUEBLO QUE VISTE UNIFORME. por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los ciudadanos» (Salvador Allende, discurso en el Estadio Nacional de Santiago, el 4 de noviembre de 1971).

Hay que tener claro que Allende se refería, y se refirió siempre cuando trató este tema, a los altos mandos militares. A nadie le cabía duda que la tropa, en un país donde existe la conscripción militar, eran hijos de obreros, campesinos y empleados con uniforme. Pero, el problema estaba con los mandos de esa tropa, su carácter de clase, sus tareas específicas en el armazón socioeconómico que se llamaba «Estado chileno». Nunca aceptó Allende discusión científica, objetiva, sobre ese tema. Nunca aceptó observaciones sobre a qué sectores de la sociedad chilena defenderían esos altos mandos en caso de una crisis generalizada de la estructura social chilena, causada por la emergencia de sectores populares en su camino hacia el poder y la participación efectiva en el desarrollo de una sociedad manejada hasta ese momento por una minoría oligarca y por los representantes de los grandes consorcios industriales, financieros y comerciales de los Estados Unidos.

El suceso que se cuenta a continuación, es típico de la actitud de Allende con respecto a las Fuerzas Armadas. A principios de abril de 1971, el senador Alberto Jerez, de la Comisión de Defensa del Senado y «coordinador» entre los generales y el Go-

bierno de la Unidad Popular, llamó a su oficina en el centro de Santiago al autor de este reportaje, para plantearle, aproximadamente, lo siguiente:

«Como tú sabes, a fines de este mes Salvador va a dar una clase magistral a la Guarnición Militar de Santiago. Es una clase que se hará en la Academia de Guerra del Ejército, ante unos 800 oficiales. Salvador me pidió que le reuniera lo mejor que exista sobre las Fuerzas Armadas chilenas, y yo le propuse tu nombre para que le hicieras un informe, para él saber sobre qué terreno pisa. Salvador está de acuerdo. Él te conoce, y sabe que eres un experto en asuntos militares chilenos desde el ángulo político... Tienes siete días para hacerlo...»

En unas veinte páginas escritas a máquina, tamaño oficio y doble espacio, el autor entregó un informe que, poco más o menos, contenía los hechos que ustedes van a leer en este capítulo, correspondientes a los años que van desde 1964 a 1970. Además, el informe contenía un esbozo de interpretación de la situación, señalando el fuerte peligro para la estabilidad del Gobierno UP que significaba la presencia en las Fuerzas Armadas de los mismos altos mandos que antes de la toma del mando presidencial.

A fines de abril, durante el desarrollo de un encuentro de periodistas de izquierda, Alberto Jerez tenía el siguiente recado de Allende: «Salvador agradeció mucho tu informe, pero me dijo que no le serviría de nada, porque tú hablas allí de unas Fuerzas Armadas fantasmas, sacadas de los libros de Lenin, y que él trata con seres humanos de carne y hueso. Me dijo que te explicara que las Fuerzas Armadas chilenas son de un tipo especial, que Lenin no previó en sus libros...»

Infelizmente para el Presidente constitucional de Chile, las Fuerzas Armadas «fantasmas» destruyeron el 11 de septiembre de 1973 su vida, el Palacio de la Moneda, la residencia de Tomás Moro y varias fábricas, además de asesinar a decenas de miles de trabajadores chilenos, encarcelando a otras decenas de miles y destruyendo todas las libertades del pueblo chileno. Los «fantasmas» inauguraron para mi país el fascismo más brutal aplicado en el mundo desde la noche que cayó sobre el pueblo alemán Adolfo Hitler y sus nazis.

No cabe en los propósitos de este reportaje explicar por qué Salvador Allende, y la mayor parte de las directivas de los partidos políticos de la Unidad Popular, tuvo esa actitud ciega y suicida con respecto a los altos mandos militares de Chile. Pero, es importante dejar constancia del hecho.

Esto nos pone en situación de volver a tomar el hilo de los acontecimientos que titulamos como «El caso Schneider».

### *Un problema para EEUU*

Cuando a principios de 1964, el Pentágono norteamericano decidió poner un grado más de preocupación en sus relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, estaba dando el primer paso para «reparar y reacondicionar» el deteriorado último baluarte de la dominación imperialista en Chile, en caso de que las «condiciones actuales continúen mostrando una tendencia al peligro de una subversión obrera y campesina en Chile».

Para los generales norteamericanos del Comando Sur en la Zona del Canal de Panamá (que funciona con un costo de 136,5 millones de dólares al año, con 12 generales y almirantes para 10.500 hombres), encargados de «proteger y administrar» los Programas de Ayuda Militar a América Latina, el «caso de Chile», en 1964, era el caso de «problemas en potencia».

La situación política y económica del país demostraba una tendencia a un serio enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los intereses de los grandes monopolios chilenos y yanquis por otro. Era el último año del período presidencial de un representante de los monopolios chilenos (Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa monopólica central de un conjunto empresarial chileno-norteamericano de más de 500 millones de dólares de capital social), con claras señales de descalabro económico: más de 46 % de inflación, después de haber tenido un índice de 8 % en 1961, de 14 % en 1962 y de 45 % en 1963. La cesantía superaba el 7 %, es decir, más de 200.000 desocupados sobre un total aproximado de 2.800.000 chilenos considerados como «fuerza de trabajo». La deuda externa llegaba a 1.896 millones de dólares (de los cuales 1.629 eran créditos ya utilizados y 267 millones en créditos todavía no utilizados). La tasa de mortalidad infantil era de 102,9 por cada mil niños nacidos vivos.

Las diferencias de condiciones de vida entre las distintas clases sociales eran brutales: 1.000.000 de campesinos y obreros vivían con 380 dólares anuales de ingreso; mientras 60.000 propietarios de latifundidos, empresas monopólicas y administradores gerenciales de las mismas, gozaban de un ingreso promedio anual de 10.450 dólares.